


REPUBLICA DE COLOMBIA			
			
<b>JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO SOACHA - CUNDINAMARCA</b>			
<b>TIPO DE PROCESO</b>		ACCION DE TUTELA	
RADICACIÓN DEL PROCESO JUZGADO DE ORIGEN 202100042		257544003002	
RADICACIÓN DEL PROCESO 202120053		257543103002	
<b>ACCIONANTE</b>	JESÚS ALBERTO GRIMALDO ROJAS		
<b>ACCIONADOS</b>	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA SECCIÓN CARTERA		
<b>DERECHO</b>	PETICIÓN	<b>DECISIÓN</b>	CONFIRMA
Soacha, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)			

### Asunto a tratar

Procede el Despacho a resolver la impugnación del fallo de Tutela proferido el día veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021) por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA - CUNDINAMARCA**, el cual negó por improcedente la acción de tutela incoada. <https://bit.ly/3y6GW8d>

### Solicitud de Amparo

El señor JESÚS ALBERTO GRIMALDO ROJAS, interpuso acción de tutela, de conformidad con los hechos descritos; en donde solicita el amparo del derecho fundamental a la petición. <https://bit.ly/3eWhhaS>

### Trámite

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca admitió la acción de tutela el día quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021), y ordenó notificar a las partes, para que ejercieran su derecho de defensa.

El fallador de primera instancia estudió el derecho amenazado, y de acuerdo al principio de informalidad el cual le corresponde al juez identificar y proteger, no tuteló los derechos invocados por el accionante.

Por lo que en su oportunidad el accionante JESÚS ALBERTO GRIMALDO ROJAS, impugnó el fallo proferido por el Juez de primera instancia. <https://bit.ly/3y6HkDH>

Habiendo correspondido por reparto a este Juzgado, se admite la impugnación al fallo aludido, mediante auto calendarado el día dos (02) de julio de 2021.

### Impugnación

En el expediente digital obra escrito de impugnación, donde JESÚS ALBERTO GRIMALDO ROJAS plantea su inconformidad. <https://bit.ly/3y6HkDH>

### Fundamentos de la decisión

#### PROBLEMA JURÍDICO

En este asunto corresponde al Despacho resolver, si lo decidido por el Juez de primera instancia corresponde a un actuar legítimo del fallador, qué en últimas se concretó, en si resulta violatorio el derecho de petición, siendo este presuntamente vulnerado por la entidad CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA, al no contestar de manera positiva a la petición elevada por el accionante, donde solicitó a la entidad accionada que se decretara la prescripción de unas obligaciones creadas hace más de 23 años con la entidad Caja Agraria en liquidación y la federación de cafeteros, teniendo en cuenta primero que el accionante ostenta la calidad especial y protección constitucional, por ser víctima del desplazamiento forzado por causa de la violencia, y segundo porque el

<b>ASUNTO</b>	<b>ACCIÓN DE TUTELA</b>
<b>RADICACIÓN DEL PROCESO</b>	
<b>257543103002202120053</b>	
Soacha, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)	

accionante no adquirió ninguna obligación, ni compromiso con la entidad accionada.

## COMPETENCIA

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

La acción de tutela constituye un mecanismo encaminado a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública e incluso en algunos casos por los particulares.

Desde el plano del propio funcionamiento estatal, también es posible identificar un cambio a partir de la Constitución de 1991, porque los fines que se predicen de nuestra organización política, los principios que se defienden en la Carta de Derechos y la estructura que se construye tras la idea de la función pública, exige la participación de todos los servidores públicos –sin importar cuál sea el contenido material de sus actos- y una aplicación de las normas vigentes que son tomadas como el inicio de la tarea de protección y garantía de los derechos.

## CONTENIDO DE LA DECISIÓN

De acuerdo con los argumentos planteados por el impugnante, el análisis que esta Juzgadora, debe realizar es si el fallo del a quo en efecto es acertado. Para tales efectos, se procede al análisis del caso en concreto. Y en aras de dar respuesta al problema jurídico planteado de acuerdo con los diferentes documentales arrimadas al plenario.

## CASO CONCRETO

De las diferentes pruebas recaudadas en el plenario se interpreta que la inconformidad del accionante radica, en que, la entidad accionada CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA, contestó de manera negativa a la petición elevada por el accionante el día veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021), la cual fue asignada bajo el radicado interno ZEUS 62022, donde se solicitó que se decretara la prescripción de las obligaciones adquiridas hace más de 23 años con las entidades Caja Agraria en liquidación y la Federación de Cafeteros, teniendo en cuenta que el accionante ostenta la condición especial de víctima del desplazamiento forzado, además manifiesta el accionante que él no tiene obligaciones pendientes con la entidad accionada, pues dichos créditos no fueron firmados y adquiridos con dicha entidad.

Por lo que se refiere al derecho de petición, la Honorable Corte Constitución ha establecido en repetidas oportunidades que la acción de tutela resulta procedente en relación con este derecho fundamental, así:

*“En cuanto a este punto, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en afirmar que la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales. De igual manera, se ha*

ASUNTO	ACCIÓN DE TUTELA
<b>RADICACIÓN DEL PROCESO</b>	
<b>257543103002202120053</b>	
Soacha, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)	

sostenido que al tener el derecho de petición aplicación inmediata, el amparo constitucional es un mecanismo principal para su protección. Dijo la Corte en una ocasión: “(d)ado que la señora Rueda Villalba expone en su escrito de tutela la posible afectación de su derecho fundamental de petición, la acción de tutela sería procedente de manera directa en tanto se refiere a un derecho fundamental de aplicación inmediata, situación que se verifica en abundante jurisprudencia de esta Corporación”. (Sentencia T- 084 - 15 , 2015 )

En otra oportunidad, el Alto Tribunal constitucional determino que el derecho de petición es un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, siendo este una manera de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. A causa de lo anterior considera este Despacho judicial, pertinente y útil citar la Sentencia T - 206 -18, en la cual se desarrolla la finalidad que tiene el derecho de petición:

*“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.*

*El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.*

*El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”*

*El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones. De dicha norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa dirección, “[l]a notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. (Sentencia T - 206 - 18, 2018)*

Conforme a lo anterior, y de acuerdo a la documental adosada en primera instancia, encuentra este Despacho judicial, que la entidad accionada CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA, dio respuesta a la petición elevada por el accionante el señor JESÚS ALBERTO GRIMALDO ROJAS el día 29 de

ASUNTO	ACCIÓN DE TUTELA
<b>RADICACIÓN DEL PROCESO</b> <b>257543103002202120053</b>	
Soacha, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)	

abril de 2021, por medio de correo electrónico, donde da a conocer al accionante los motivos por los cuales adquirió la calidad de acreedora, además dio la respectiva respuesta a cada uno de los puntos planteados por el accionante.

De lo expuesto, desde ya debe decirse que se confirmará el fallo opugnado pues es claro que la entidad accionada, no ha vulnerado ningún derecho fundamental; por ende, los hechos que dieron origen a la acción constitucional han sido superados por la entidad CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA, al dar respuesta de fondo a la petición elevada, y a voces de la H. Corte Constitucional la entidad accionada atendió a lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva. Aunado a que en reiterada jurisprudencia se ha sostenido, que la acción de tutela por su carácter residual, no puede constituirse en un mecanismo alternativo o que sustituya otros medios de defensa ordinarios.

Ahora bien, de suyo se infiere que el juez de instancia, previo estudio expuso que las accionadas no incurrieron en vulneración al derecho fundamental elevado, en razón que, atendiendo a lo acreditado en el plenario la jurisprudencia y la normatividad vigente, niega el amparo constitucional solicitado por el accionante, pues estima el a quo que *“Al respecto debe resaltarse al accionante, que esta controversia relativa a la aplicación de los artículos 2535 y siguientes del Código Civil en las obligaciones contraídas con la CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE CAFETEROS, ahora en cabeza de un nuevo acreedor, debe ventilarse ante un Juez Civil para que así la resuelva conforme a las normas vigentes sobre la materia. No obstante, no es ante este Juez de Tutela en uso de una acción constitucional, sino a través del procedimiento señalado por el Código General del Proceso en sus artículos 370 a 373 y 390 a 392, según sea el caso pertinente”*.

A lo anterior, considera esta Jueza Constitucional que se está ante el fenómeno de carencia actual de objeto, por hecho superado, por lo que la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia T 038 - 2019 que:

*“La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”. Específicamente, esta figura se materializa a través en las siguientes circunstancias:*

*Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.”*  
(Sentencia T-038/19, 2019)

En conclusión, no se evidencia una vulneración al derecho fundamental que se conduela como transgredido según lo dicho por el accionante, contrario a ello se evidencia que la accionada entidad CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA actuó conforme a derecho.

Siendo estos los argumentos para que este Despacho constitucional **CONFIRME** íntegramente la decisión adoptada por el a quo.

**En mérito de lo expuesto el juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la Ley.**

**R e s u e l v e**

**PRIMERO: CONFIRMA** el fallo proferido el día veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021) por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL**

ASUNTO	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN DEL PROCESO 257543103002202120053	
Soacha, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)	

**MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA**, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

**TERCERO:** Cumplido lo anterior, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**CÚMPLASE**

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**PAULA ANDREA GIRALDO HERNANDEZ**  
Juez

**Firmado Por:**

**PAULA ANDREA GIRALDO HERNANDEZ**  
**JUEZ CIRCUITO**  
**JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE SOACHA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**cb38ff602f6872fef343d34443b9e4dc5b7148a4a00f184d6220175eaa5278d4**

Documento generado en 26/07/2021 08:38:01 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Juzgado Segundo Civil del Circuito - Soacha Cundinamarca